

Justicia alimentaria: Amenazas a la soberanía alimentaria

BRASIL

José Pedro Martins desde São Paulo

Rio + 20 provocará polémica sobre biocombustibles

Evento mundial pondrá en la balanza biocombustibles y seguridad alimentaria.

La polémica sobre el uso de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles, que afecta la seguridad alimentaria mundial, se reanudará con fuerza en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20, que se celebrará en Rio de Janeiro del 20 al 22 de junio del 2012.

Varias organizaciones no gubernamentales que participan en la preparación de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la conferencia oficial, ya se están movilizando para cuestionar el avance de la producción de biocombustibles en detrimento del uso de tierras agrícolas para la producción de alimentos mediante la agricultura familiar y comunal, así como sus posibles impactos ambientales.

Como sede de Rio+20, como lo fue de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Eco-92, en 1992, Brasil está en el centro de la polémica sobre el impacto de la expansión de los biocombustibles en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria mundial.

La controversia comenzó con fuerza en octubre del 2007, cuando el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el sociólogo suizo Jean Ziegler, divulgó un informe que afirmaba que la expansión del etanol, biocombustible derivado de la caña de azúcar, estaría ayudando a elevar los precios de los alimentos y, con ello, contribuyendo al empeoramiento de la seguridad alimentaria de las poblaciones más pobres.

En su informe, Ziegler sugería una moratoria de cinco años para la producción de biocombustibles fabricados a base de productos alimenticios, tales como la caña de azúcar en Brasil y el maíz en EEUU. Y afirmaba que el 1% de aumento en los precios de los alimentos significaba el aumento en 16 millones del contingente de personas malnutridas en el mundo.

Crimen de lesa humanidad

El tono de las críticas a los biocombustibles se elevó en abril del 2008, cuando Ziegler señaló que la producción en masa de esta fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles representaba un crimen de lesa humanidad, a la luz de sus efectos en los precios mundiales de los alimentos.

Las declaraciones formuladas por Ziegler fueron replicadas rápida y enérgicamente por el entonces presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien llegó a afirmar que Ziegler no conocía la realidad de Brasil. El presidente Lula destacó que el aumento de precios de los alimentos no podía atribuirse a los biocombustibles.

La realidad es que las fuertes declaraciones del relator promovieron un gran debate mundial sobre la relación entre biocombustibles y seguridad alimentaria. En ese momento se atribuyó esa polémica al hecho de que gran parte de la producción de maíz en EEUU se estaba destinando a la fabricación de biocombustibles, lo que contribuyó a elevar los precios de los alimentos.

Pero la preocupación permanece en el ámbito de los órganos de las Naciones Unidas, como indican publicaciones recientes. En el documento "El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011", la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dejó en claro su preocupación por el impacto de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria.

La FAO dice en el documento que "es probable que los precios de los alimentos sigan siendo elevados y volátiles. La demanda de los consumidores en los países con economía en rápido crecimiento aumentará, la población continúa creciendo, y si prosigue la expansión de los biocombustibles el sistema alimentario se verá sometido a demandas adicionales".

El documento destaca también que "las políticas en materia de biocombustibles han establecido nuevos vínculos entre el precio del petróleo y el de los productos alimenticios básicos. Al aumentar los precios del petróleo se incrementará la demanda de biocombustibles, lo cual encarecerá los alimentos, y lo contrario cuando disminuyan los precios del petróleo".

El nuevo director general de la FAO, el brasileño José Graziano



Cada vez más tierras agrícolas se destinan al cultivo de caña de azúcar para producir etanol.

CEPAL

da Silva, ha argumentado que la producción de biocombustibles no debe afectar la producción de alimentos. Sin embargo, también ha dicho que cuatro países de América Latina —Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay—, según estudios realizados por la FAO, pueden aumentar la producción de biocombustibles “sin afectar la seguridad alimentaria”, en función de su disponibilidad de tierras. De hecho, el biocombustible derivado del maíz es el que más preocupa a la FAO, según Graziano da Silva.

Continúa expansión de agronegocios

La cuestión de los biocombustibles está, por tanto, en el corazón del debate global sobre la seguridad alimentaria y sobre las alternativas a los combustibles fósiles que provocan el calentamiento global. En Brasil es clarísima la preocupación de las organizaciones no gubernamentales con la expansión de la producción de biocombustibles, particularmente el etanol, en zonas ecológicamente vulnerables como el Pantanal y la Amazonia.

“Es un crimen ecológico y tiene desventajas enormes en la producción de alimentos”, sostiene el presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA), Plínio de Arruda Sampaio. El etanol contribuye sólo a “mantener la industria del automóvil, que está condenada a pasar por grandes cambios” en función de cuestiones como el calentamiento global, añade.

Productores de bioetanol

Lugar	País	% del mercado mundial	Cultivos
1°	EEUU	54.7	maíz
2°	Brasil	32.2	caña de azúcar, maíz, sorgo
10°	Colombia	0.4	caña de azúcar, mandioca

Fuente: CEPAL, 2010.

Productores de biodiesel

Lugar	País	% del mercado mundial	Cultivos
1°	EEUU	14.3	soja, aceite vegetal
2°	Argentina	13.1	soja, girasol, jatropha
5°	Brasil	9.7	soja, girasol, algodón, palma aceitera

Fuente: CEPAL, 2010.

Brasil tiene 355 millones de Ha de tierras aptas para el cultivo. Actualmente 9.4 millones de Ha se destinan a la caña de azúcar. Sin embargo, estudios del propio gobierno brasileño indican que en los próximos años continuará la expansión de las áreas ocupadas por la caña de azúcar.

El documento “Brasil, proyecciones del agronegocio 2010/2011 a 2020/2021”, elaborado por la Oficina de Gestión Estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, indica las proyecciones de expansión de tierras en caña y soja, “dos actividades que compiten por espacio en Brasil”. De acuerdo con el documento, estos dos cultivos juntos “deben presentar en los próximos años una expansión de 7.4 millones de Ha:

5.3 millones de Ha de soja y 2.1 Ha de caña de azúcar”.

“Muchos agricultores, a causa de los precios, van a seguir optando por la caña, y eso es muy malo, inclusive porque sigue empeorando la migración y la sobrepoblación de las ciudades”, dice Sampaio. El avance de la soja y de la caña es, de hecho, señalado por las organizaciones de apoyo a los campesinos sin tierra y pequeños agricultores, como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), como una fuente del agravamiento de los conflictos agrarios en Brasil. □

Artículo completo:

<http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?item=1&art=6574>

PARAGUAY

Gustavo Torres desde Asunción

Agronegocios ponen en riesgo agricultura familiar

Sistemas alimentarios tradicionales van desapareciendo ante el avance de la agricultura a gran escala.

La agricultura, como práctica familiar campesina e indígena que durante siglos garantizó de manera natural la alimentación en el actual territorio paraguayo, está amenazada por un reducido grupo de productores que desarrollan un modelo de agricultura tecnificada a gran escala, que reduce cada vez más el empleo de mano de obra, y en la que las corporaciones multinacionales pasan a tener control sobre los recursos naturales: suelo, agua y la biodiversidad de gran parte del territorio paraguayo.

Desde principios de la década de 1970, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), se abrió el campo paraguayo al desarrollo de agronegocios, entre ellos el cultivo masivo de soja, convencional primero y transgénica después, en manos de empresas transnacionales.

Desde entonces el avance de esta práctica basada en la mecanización, y la utilización de agrotóxicos ha sido constante. El sector latifundista y las empresas transnacionales agropecuarias —Monsanto, Cargill, Archer Daniel Midlan (ADM), Shell Agro, Dow, BASF, Mosaic, Bunge, Dupont, Syngenta, Bayer, así también entre otras— que

acaparan el mercado de la semillas transgénicas, agrotóxicos y el comercio de cereales se han apropiado de grandes extensiones de tierras.

Este modelo económico productivo fuerza a la población rural a la sustitución de alimentos deseados, como la carne bovina, por otros menos apreciados y de menor valor nutritivo, afectando su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones ambientales y deteriorando su sistema alimentario tradicional, según Marcos Glauser, antropólogo e investigador de la no gubernamental Base Investigaciones Sociales (Base IS).

La desaparición de fuentes naturales de alimentos silvestres que formaban parte de los sistemas alimentarios tradicionales indígenas, a causa de la deforestación y destrucción de bosques, también afecta en ese sentido.

En este contexto están amenazadas prácticas de siembras o, peor aún, a punto de desaparecer algunos de estos rubros de producción agroecológica: caña de azúcar, yerba mate, tung, tártago, soja orgánica, maíz y arroz orgánico, sésamo, frutas y hortalizas, algodón, maní, poroto (frijoles), naranja agrio (base de la esencia de petit grain), menta (esencia de menta), ka`a he`é (stevia), cedrón, miel de abeja (por desmontes y degradación de hábitat), animales domésticos (tipo granja), entre otras formas.

La base de este modelo productivo se encuentra en organismos genéticamente modificados (OGM), más conocidos como transgénicos. Los OGM son variedades vegetales o animales creadas artificialmente en laboratorios, cuya característica es la introducción de genes de

otras especies para crear organismos nuevos. Las semillas genéticamente modificadas están diseñadas para resistir herbicidas de amplio espectro (glifosato, glufosinato).

El comercio de semillas transgénicas estaba prohibido en el país hasta que recibiera autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2004. El uso de las semillas transgénicas siempre ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, campesinos e indígenas, sin embargo, en 1999 éstas empezaron a ser introducidas de contrabando desde la Argentina por los grandes productores sojeros.

El principal potencial futuro que ofrece la manipulación genética es el lucro, por eso el negocio de los transgénicos pasó a manos de las compañías transnacionales de la biotecnología, que dominan los mercados mundiales de fertilizantes, abonos, semillas, agrotóxicos (como glifosato, herbicida usado para eliminar plantas no deseadas), entre las que se encuentran: Monsanto, Cargill, ADM, Bunge, Dupont, Syngenta, Bayer, Shell Agro, Dow, BASF, Mosaic y Dreyfus.

De la misma forma las maquinarias utilizadas provienen exclusivamente de empresas transnacionales —tractores, cosechadoras, fumigadoras y sembradoras—, cuyos costos en los concesionarios oscilan entre US\$100,000 y \$400,000. La rentabilidad de la producción de soja como monocultivo depende de grandes extensiones de tierra, uso intensivo de fertilizantes químicos, semillas transgénicas, requiere de poca mano de obra agrícola al utilizar maquinarias especializadas, de tal forma que se necesita un solo empleado para cultivar entre 100 y 200 Ha, constata el investigador estadounidense, Richard Doughman, en su libro *La chipa y la soja, la pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del Este paraguayo*.

Doughman explica en el texto que “la cadena productiva de la soja se ha expandido con tal intensidad, empezando en las regiones este y sureste del país, que ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador mundial de soja transgénica con más de 2 millones de hectáreas cultivadas con esta leguminosa, en tanto ocupa el sexto lugar en la producción mundial de esta oleaginosa.

La superficie sembrada de soja en el año 2010 alcanzó 2.83 millones de hectáreas, equivalente al 7% del territorio nacional.

Entorno macroeconómico

Lo paradójico del modelo productivo paraguayo es que a pesar del crecimiento macroeconómico —14.5% en el 2010, el primer lugar en América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, gracias, en gran medida, a la producción de 8.4 millones de toneladas de soja—, la población en situación de pobreza extrema creció en el mismo periodo de 19% a 20%, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC).

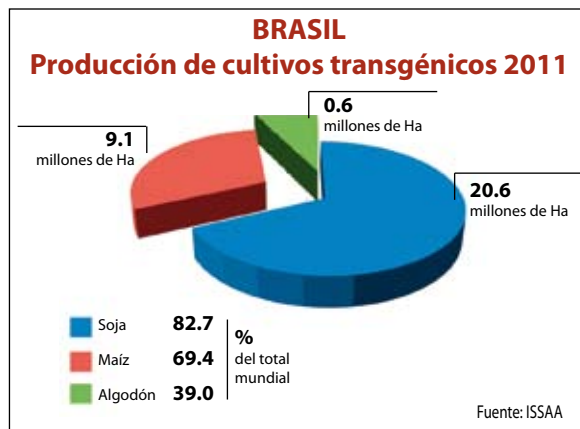
“El modelo de los agronegocios destruye empleo, tanto urbano como rural, en donde un 20% [poco más de un millón de los 6.7 millones de paraguayos y paraguayas] vive en la pobreza extrema en un país que actualmente es señalado como el cuarto exportador mundial de granos de soja, y sexto de carne, récord en exportación pero con el consecuente desabastecimiento del mercado local. Una población que pasa de consumir 70 kg de carne per cápita se redujo a 30 kg per cápita”, compara la abogada Milena Pereira Fukuoka, autora del libro *El Estado y la garantía del derecho a la alimentación adecuada en Paraguay*.

A partir de los impactos medioambientales, económicos y sociales que genera el llamado “boom de la producción sojera transgénica” en

Países latinoamericanos productores de transgénicos 2011

Lugar	País	Millones de Ha	Cultivos
2°	Brasil	30.3	soja, maíz, algodón
3°	Argentina	23.7	soja, maíz, algodón
7°	Paraguay	2.8	soja
10°	Uruguay	1.3	soja, maíz
11°	Bolivia	0.9	soja
16°	México	0.2	algodón, soja
18°	Colombia	0.05	algodón
19°	Chile	0.05	maíz, soja, canola
20°	Honduras	0.05	maíz
28°	Costa Rica	0.05	algodón, soja

Fuente: Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISSAA, siglas en inglés)



Paraguay, situación denunciada por las principales organizaciones del campo —Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), entre otras— y organismos no gubernamentales como Base IS, Alter Vida y Sobrevivencias, se discute cada vez más acerca de la responsabilidad de los agronegocios en la destrucción de los suelos, su interferencia negativa en la biodiversidad con la masiva deforestación, la contaminación de arroyos, ríos y acuíferos, y su cuota de responsabilidad en la exclusión de campesinos e indígenas de la cadena de producción agropecuaria, acompañada de la explotación del patrimonio natural y cultural de gran parte de la población rural.

“Afrontar los problemas estructurales de la seguridad alimentaria en el Paraguay sólo podrá realizarse mediante el efectivo apoyo del Estado”, afirma Pereira Fukuoka.

Pereira Fukuoka considera que esa ayuda debe consistir en permitir el acceso a la tierra como medio de producción “a los campesinos

y comunidades indígenas, con asistencia técnica adecuada para los pequeños agricultores, programas de diversificación agrícola y de crédito blando a largo plazo”.

A través del Plan Estratégico, Económico y Social 2008/2013, junto con el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay (PLANAL), el gobierno busca revertir la situación de la población expuesta a la prevalencia de la desnutrición, malnutrición y enfermedades de base alimentaria, que abarca a cerca del 40% de la población del país.

Respecto a la agricultura familiar, en el PLANAL se destacan algunos programas de incentivos y apoyo a la producción agrícola, afirmándose la necesidad de una mejor evaluación de los mismos, pues estas iniciativas fueron calificadas como frágiles por las organizaciones campesinas y los agricultores familiares entrevistados, afirma Pereira Fukuoka.

Para el presente año, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley sobre seguridad alimentaria, la misma consiste en la distribución de semillas para cultivos, hortalizas y arvejas para los campesinos. El viceministro de Agricultura, Andrés Wehrle, indicó que en el país hay una emergencia alimentaria por la sequía, y el plan abarcará a unas 210,000 familias (de las cuales 28,000 familias son indígenas), que poseen hasta 10 Ha. De aprobarse esa ley, el gobierno invertirá US\$3 millones para entregar un kit de alimentos a cada una de las 210,000 familias, confirmó el viceministro. El kit consiste en la distribución de 15 kilos de semillas de maíz y tres kilos de poroto (frijoles) por familia en febrero; hortalizas y arvejas en marzo y abril.

El proyecto de ley pretende garantizar al campesino o indígena afectado que pueda exigir su derecho en caso de que no reciba la asistencia.

Sin embargo, para Pereira, las medidas económicas y productivas adoptadas en los planes, no responderían aún a la redistribución de ingresos, generación de empleo y consideración de las necesidades de la población en materia de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que las principales agencias estatales competentes apuestan a profundizar aún más el modelo agroganadero exportador, sin considerar el adecuado abastecimiento de alimentos para el consumo nacional. □

Artículo completo:

<http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?item=1&art=6560>

Crece concentración de tierras en manos extranjeras

Casi dos tercios de tierras para cultivo de alimentos adquiridas por gobiernos o empresas foráneas son destinadas a biocombustibles.

Los procesos de concentración, extranjerización y degradación de la tierra pasaron a ocupar un lugar central en las preocupaciones de organismos supranacionales y organizaciones no gubernamentales que alertan, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), acerca de los “efectos negativos de esos fenómenos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”.

En un estudio titulado “El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia”, sobre 17 países de la región, con especial enfoque en América del Sur y, en ella, básicamente en los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur) —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, grandes productores de alimentos—, la FAO advierte sobre la situación de Argentina y Brasil en aquellos tres procesos, para afirmar que “estamos ante una nueva ola de extranjerización que provocó un tremendo proceso de concentración” y un “alza descontrolada en el precio de la tierra, que en Uruguay, por ejemplo, se multiplicó por siete en los últimos 10 años”.

Uruguay tiene una superficie cultivable de 16 millones de hectáreas. En la última década se realizaron operaciones por 6.3 millones de hectáreas. Según los últimos datos estadísticos del estatal Instituto Nacional de Colonización, el 83% de los campos vendidos en el 2010 (336,000 Ha) fue comprado por extranjeros, incluyendo europeos, brasileños, argentinos, neozelandeses, coreanos y estadounidenses.

Hasta ahora, cuando se hablaba de extranjerización de la tierra, los organismos del sistema de las Naciones Unidas se referían a acciones privadas de inversionistas (especuladores) movidos por el afán de lucro. En el informe, presentado en noviembre del año pasado, se pone el acento por primera vez en el acaparamiento de tierras, o “*land grabbing*”, definido como la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos en la que también participan gobiernos extranjeros.

Así como la FAO se ocupa de las tierras extranjerizadas para uso con fines de producción de alimentos u otros vegetales destinados a la elaboración de biocombustibles, otras entidades hablan de la venta y concentración para desarrollos mineros o turísticos.

Grain, organización internacional que trabaja apoyando campesinos y movimientos sociales, cita los casos de empresas mineras como la estadounidense Newmont Mining, que explota el yacimiento aurífero

de Yanacocha, en Cajamarca, Perú, y las inversiones de la canadiense Barrick Gold en “toda la zona alta de América del Sur”.

Inversión en tierras

Pero Grain también hace blanco en los Estados que se lanzaron a participar en el acaparamiento de tierras. No especifica las compras país por país, pero asegura que Corea del Sur es el primer comprador mundial, con 2.3 millones de hectáreas, seguido por China (2.1 millones) y Arabia Saudita (1.6 millones). Las razones de estas compras, explica, son obvias: se trata de Estados con gran crecimiento económico que cuentan con recursos suficientes para comprar donde sea los recursos naturales que no tienen, como *soja, trigo y colza*.

En el caso de China —consumidor de prácticamente toda la soja transgénica que producen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— “hay un intento de comprar tierras en países de gran riqueza natural y producir los alimentos que necesita para abastecer su mercado interno”, dice Grain. En el 2010, la justicia argentina frenó un acuerdo que había hecho la provincia sureña de Río Negro con Heilongjiang, por el cual transfería 254,000 Ha a esa empresa china que desarrollaría un megaproyecto con aquel fin.

También en Argentina, el pasado 22 de febrero el gobierno de la provincia norteña de Chaco reveló que acababa de llegar a un acuerdo con una empresa paraestatal de Arabia Saudita por el que entregaba 200,000 hectáreas de tierras fiscales de la selva virgen conocida como “El Impenetrable”, que se destinarán a la producción de alimentos que serán exportadas al mercado saudita. A cambio, la empresa de Riad invertirá US\$400 millones. Allí viven actualmente 60,000 indígenas wichi, que serán desplazados.

International Land Coalition (ILC), alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales que trabajan en la promoción de un acceso seguro y equitativo a la tierra, señala el rol “significativo que juegan las elites nacionales en el proceso de concentración de las tierras”, un fenómeno también observado por Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, y uno de los autores del estudio de la FAO opinó que se trata, además, “de una concentración de influencias, de poder político en los ámbitos geográficos donde se está desarrollando, y también tiene que ver con restricciones a la democracia”.

El estudio de la ILC, que no está referido exclusivamente a América Latina sino a “un conjunto de países en vías de desarrollo” ofrece una conclusión sorprendente que ratifica el trasfondo especulativo de las inversiones: sobre 71 millones de hectáreas que cambiaron de mano en el 2010, el 58% fue destinado a la plantación de vegetales

para uso en la elaboración de biocombustibles, el 22% para minería, turismo, industria y desarrollos forestales y sólo el 20% fue afectado a la producción de alimentos. □

Artículo completo: <http://www.noticiasaliadas.org/articulos.asp?art=6612>



ndossier temático

Una producción de Noticias Aliadas, servicio de información de Comunicaciones Aliadas.

www.noticiasaliadas.org

Publicación auspiciada por American Jewish World Service (AJWS)

Próximo número: Junio 2012

Justicia alimentaria:
Alternativas al actual sistema alimentario